

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

Medellín, veintinueve (29) de junio de dos mil veintiunos (2021)

Demandante	Luis Javier Pino Villa
Demandada	Colpensiones
Radicado	05 088 31 05 001 2017 01294 01
Decisión	Declara nulidad
Acta	096 de 2021

La **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por los Magistrados Jaime Alberto Aristizábal Gómez quien actúa como ponente, John Jairo Acosta Pérez y Francisco Arango Torres, procede a resolver lo correspondiente a la segunda instancia, dentro del proceso de la referencia.

ANTECEDENTES

El señor Luis Javier Pino Villa demandó a Colpensiones pretendiendo el reconocimiento y pago de los incrementos pensionales por su compañera permanente a cargo, indexación y costas del proceso.

Como fundamento de sus pretensiones expuso que el ISS hoy Colpensiones le concedió la pensión de vejez en Resolución 003882 de 2005, conforme al régimen de transición. Convive con su compañera permanente Martha del

Socorro Amaya Muñoz quien depende económicamente de él. Agotó reclamación administrativa.

El auto del 9 de marzo de 2020 se señaló fecha para dictar sentencia anticipada, la cual se profirió el 23 de abril de 2020 en forma escrita, absolviendo a la entidad demandada de las pretensiones formuladas en su contra.

Por ser un proceso de única instancia y al ser adversa la sentencia a los intereses del demandante, quien ostenta la calidad de pensionado, se ordenó el envío del proceso a la presente corporación para conocer del grado jurisdiccional de consulta.

No obstante, la Sala advierte que en el trámite procesal adelantado se configuran varias causales de nulidad como pasará a analizarse.

PROBLEMA JURÍDICO

El problema jurídico a resolver en virtud del grado jurisdiccional de consulta a favor del demandante, gira en torno a determinar si es procesalmente posible en el procedimiento laboral, aplicar la figura jurídica de la sentencia anticipada, prevista en el Código General del Proceso; y si en el caso objeto de consulta es viable dicha figura en la forma prevista por el Juez, o si debe declararse la nulidad del proceso.

CONSIDERACIONES

La sentencia anticipada, de consagración en el artículo 278 del Código General del Proceso, establece de manera taxativa los eventos en los cuales se puede acudir a dicha figura procesal, precepto que en su tenor literal consagra:

“(…) Artículo 278. Clases de Providencias. Las providencias del juez pueden ser autos o sentencias.

(…)

En cualquier estado del proceso, el juez deberá dictar sentencia anticipada, total o parcial, en los siguientes eventos:

1. Cuando las partes o sus apoderados de común acuerdo lo soliciten, sea por iniciativa propia o por sugerencia del juez.
2. Cuando no hubiere pruebas por practicar.
3. Cuando se encuentre probada la cosa juzgada, la transacción, la caducidad, la prescripción extintiva y la carencia de legitimación en la causa

(...)”.

El Juez a quo consideró que estaban dadas las condiciones y presupuestos contenidos en el mandato antes citado, para dictar sentencia anticipada, y con ocasión a la remisión normativa que ordena el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social precisó que:

“... Si bien el artículo 80 del Código de Procedimiento Laboral, señala que “en el día y hora señalados el juez practicará las pruebas, dirigirá las interpelaciones o interrogaciones de las partes y oirá las alegaciones de estas”, la presente sentencia, escrita y por fuera de audiencia oral, es procedente toda vez que se cumple, de manera estricta y diáfana, lo dispuesto en el numeral segundo del canon 278; aunado a que las pruebas documentales aportadas por las partes y que reposan en el plenario, corresponden a la naturaleza del asunto y permiten a todas luces, resolver de forma adelantada este juicio.

En esta medida, cuando el Juez como director del proceso advierte que no habrá debate probatorio, o que existiendo pruebas para practicar en audiencia como testimonios e interrogatorios, las mismas se tornan innecesarias e inútiles para resolver el problema jurídico planteado, tiene la obligación de proferir sentencia sin adicionales trámites, en cabal cumplimiento y aplicación de los principios de celeridad y economía procesal, que, a fin de cuentas, exigen de la jurisdicción decisiones prontas, con el menor número de actuaciones posibles y sin dilaciones injustificadas. Empero, de no ser así, se estaría sometiendo cada causa a una prolongación o de mora absurda, completamente injustificada y sin razón de ser, todo en contra de los fundamentos sustanciales y procesales que acompañan los trámites judiciales...”.

Como cuestión preliminar se anota que si bien el magistrado ponente consideraba que el procedimiento laboral no aplicaba la figura de la sentencia anticipada, concretamente artículo 372 del Código general del Proceso, a partir de la sentencia del 16 de febrero hogaño, dictada dentro del proceso radicado 05088310500120170100001 con ponencia del doctor FRANCISCO ARANGO

TORRES, rectificó la postura y se acogió al criterio mayoritario de la Sala por las razones expuestas en la aclaración de voto del trámite en cita.

En razón de lo anterior, la sala unifica su postura considerando que no es posible concluir de plano la improcedencia de la figura de la *sentencia anticipada* en el procedimiento laboral y de la seguridad social, pues con ello se desconoce las disposiciones del Código general del Proceso en el trámite laboral, en virtud del principio de remisión por aplicación analógica que regula el artículo 145 del estatuto procesal del trabajo y de la seguridad social, atendiendo a que dicha institución jurídica busca materializar los principios de economía procesal y celeridad que han de ser comunes a todas las especialidades de la jurisdicción.

De este modo, en esta sentencia serán acogidos en su totalidad los argumentos expuestos en precedente por esta misma Sala de decisión el día 17 de septiembre de 2020, bajo el RUN 05088310500120170063602, con ponencia del Dr. John Jairo Acosta Pérez, que son de idéntica aplicación en el presente caso.

Se hace menester estudiar si en el caso que ocupa la atención de la Sala concurren los presupuestos del artículo 278 del Código General del Proceso antes transcritos.

Con respecto a la primera de las causales, se tiene que en este proceso no se presentó solicitud de común acuerdo de todas las partes que integran el proceso.

En relación con la segunda causal ha de indicarse que, al tratarse de un proceso de única instancia, la etapa probatoria se agota en la audiencia de que trata el artículo 72 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que consagra “...AUDIENCIA Y FALLO. En el día y hora señalados, el juez oír a las partes y dará aplicación a lo previsto en el artículo 77 en lo pertinente. Si fracasare la conciliación, el juez examinará los testigos que presenten las partes y se enterará de las demás pruebas y de las razones que aduzcan. Clausurado el debate, el juez fallará en el acto, motivando su decisión, contra la cual no procede recurso alguno...”; etapa que tal como se evidencia en el expediente, no se realizó, y al tratarse de un proceso en el que se solicitan los incrementos pensionales de los

artículos 21 y 22 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, se requiere, la acreditación de la convivencia y dependencia económica del cónyuge o compañero(a) permanente respecto del pensionado(a), pues así lo exige la norma que los consagra, en consecuencia es necesaria la práctica de pruebas en ese sentido.

Al respecto sobre la inexistencia de pruebas por practicar, invocada por el juez primario, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia STC-3529 del 20 de marzo de 2019, señaló:

“Bajo esa perspectiva, el legislador le impuso al juez la obligación de poner fin a las controversias con prontitud en los eventos en que es innecesario agotar otras etapas o diligencias para definir una situación jurídica, lo cual, guarda armonía con los principios de eficiencia y celeridad de la administración de justicia.

Pero, la obligación de culminar la causa con premura, en particular cuando «no hubiere pruebas por practicar», debe ser aplicada con prudencia, pues, el juez no puede omitir la práctica de un elemento de convicción fundamental para la decisión definitiva, ya que vulneraría el derecho de defensa y el acceso a la administración de justicia de las partes.

Por tal razón, al hacer uso del deber de dictar sentencia anticipada, la autoridad judicial está obligada a evaluar las particularidades de la controversia, la pertinencia y la conducencia de los medios de convicción solicitados en la causa y si resulta pertinente la práctica de otros con trascendencia en el asunto, para establecer si es posible en el escenario del proceso, tomar una decisión ajustada al ordenamiento jurídico”

No se trata entonces de un asunto de puro derecho y por lo tanto el Juez solo podía pretermitir la etapa probatoria, a través de un juicio previo de inconducencia, pertinencia o inutilidad de la prueba, lo cual debe efectuarse en la etapa de decreto de pruebas, la que tal y como se señala, no se adelantó.

Finalmente frente a la última de las causales, se debe mencionar que dichas figuras no se presentan en el caso específico, sin embargo, advierte la Sala que, con relación a las excepciones de cosa juzgada y prescripción, en materia laboral, aquellas tiene regulación expresa en el artículo 32 del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 1° de la Ley 1149 de 2007,

normativa que impone que se resuelvan en la etapa procesal de las excepciones previas, sin dar lugar a una sentencia anticipada.

Así mismo, se resalta que la expedición de la sentencia SU-140 de 2019, no constituye una causal de sentencia anticipada, pues no es la valoración previa, de la no prosperidad de una pretensión, la que faculta al fallador, para pretermittir la etapa probatoria y proferir sentencia anticipada, adicional que por mandato del artículo 230 de la Constitución Nacional los jueces, "...sólo están sometidos al imperio de la ley. La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial", posición jurisprudencial, que por demás no es un tema pacífico en las altas cortes.

Al no ser procedente la sentencia anticipada en el sub lite, el Funcionario de primer grado, incurrió en varias de las causales de nulidad previstas en el artículo 133 del Código General del Proceso, específicamente en las de los numerales, 2° que establece: "...Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente concluido o pretermite íntegramente la respectiva instancia..."; 5° que consagra: "... Cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando se omite la práctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria..." y 6° que señala: "... Cuando se omita la oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso o descorrer su traslado...".

Nulidades que conforme con lo establecido en el parágrafo del artículo 136 del Código General del Proceso, son insaneables, en tanto al proferir el juez la sentencia anticipada, sin agotar la audiencia de que trata el artículo 72 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, donde se evacua la etapa probatoria y se da traslado a las partes para alegar, se entiende que pretermittió la instancia.

Tampoco se puede pasar por alto, que pese a que, la sentencia anticipada conlleva la supresión de etapas procesales que resultan innecesarias, esto no constituye una excepción al principio de oralidad, que en materia laboral es inexcusable en los términos del artículo 42 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, que dispone "...Las actuaciones judiciales y la práctica de pruebas en las

instancias, se efectuarán oralmente en audiencia pública, so pena de nulidad, salvo las que expresamente señalen la ley...”. Así pues, que al ser proferida la sentencia que puso fin al proceso, de forma escrita, se incurrió igualmente en una nulidad procesal.

Corolario de lo anterior es que no solo se presenta una nulidad procesal por tramite inadecuado, al pretermitiese etapas procesales como verbigracia la probatoria ya referida, sino además la llamada Constitucional por violación al debido proceso previsto en el artículo 29 de la Constitución Nacional.

Así que, es necesario corregir el trámite del proceso, debiéndose declarar la nulidad de lo actuado a partir del auto del 9 de marzo de 2020 por medio del cual se procedió a señalar fecha para dictar sentencia anticipada, para el 23 de abril 2020, ordenándose en su lugar al Juez de conocimiento continuar con el trámite correspondiente.

En mérito de lo expuesto, la **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve:

DECLARA LA NULIDAD en el presente proceso, a partir del auto del 9 de marzo de 2020 por medio del cual se procedió a señalar fecha para dictar sentencia anticipada, para el 23 de abril 2020, ordenándose en su lugar al Juez de conocimiento continuar con el trámite correspondiente.

Lo resuelto se notifica en **ESTADOS**. Se ordena regresar el proceso al Juzgado de origen.

Los Magistrados,

Jaime Alberto Aristizábal Gómez

John Jairo Acosta Pérez

Francisco Arango Torres

**EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA
LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados
N ° 113 de junio 30 de 2021

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>

Firmado Por:

**JAIME ALBERTO ARISTIZABAL GOMEZ
MAGISTRADO
MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA
LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-
ANTIOQUIA**

**JOHN JAIRO ACOSTA PEREZ
MAGISTRADO
MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA
LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-
ANTIOQUIA**

**FRANCISCO ARANGO TORRES
MAGISTRADO
MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE
LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena
validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto
reglamentario 2364/12

Código de verificación:
**cb8f3108a9962dab91fb8576040dc9c30eefa77158edea61406873261cdc
3297**

Documento generado en 29/06/2021 03:38:20 PM